

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2016
ANEXO AL ORDEN DEL DIA N° 1224

Impreso el día 23 de noviembre de 2016

SUMARIO

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se aprueba el presupuesto de gastos y recursos de la administración pública nacional para el ejercicio 2017. (CD-75/16)

DICTAMEN DE COMISIÓN

EN MINORÍA

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, en minoría ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el expediente CD-75/16 “de Presupuesto de Administración Pública Nacional para el ejercicio 2017”, y el expediente CD-76/16 “comunica Fe de Erratas en el proyecto de ley en Revisión de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2017. (Ref. CD 75/16)”, por las razones expuestas a continuación y las que informaré en el recinto a consejo su rechazo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016

María E. Labado.-

INFORME

Honorable Senado:

Mi rechazo al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017 se funda en que este Presupuesto no hace otra cosa que legitimar y cristalizar los graves impactos económicos y sociales que ha tenido durante este primer año de gobierno la política económica desplegada por el Poder Ejecutivo nacional.

1. El regreso del neoliberalismo

Durante la campaña presidencial, el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, no se cansó de repetir que si llegaba a la presidencia iba a "cambiar todo lo que estuviera mal y conservar todo lo que estuviera bien" en materia económica. Este slogan vacío encerraba una promesa implícita: las medidas que se fueran a tomar sólo iban a traer beneficios pero nadie iba a sufrir ningún perjuicio, porque "lo que estaba bien" se iba a mantener. De manera vaga y abstracta parecía ser la forma en la que se implementaría la también publicitada "revolución de la alegría".

Sin embargo, una vez que llegó al gobierno, el Presidente Macri implementó mecánicamente un programa económico de neto corte neoliberal con todos sus clásicos elementos: una inicial devaluación que se trasladó rápidamente a los precios, la represión salarial, el violento incremento de tarifas, la apertura de las importaciones, la desregulación y liberalización financiera y el masivo endeudamiento externo. Los resultados están a la vista: más inflación, más desempleo, reducción del salario y de los ingresos de todos los sectores vulnerables, trabajadores, jubilados y sectores medios.

2. El deterioro económico y social en los primeros 10 meses de presidencia de Mauricio Macri

Transcurridos más de 10 meses del gobierno de Mauricio Macri no hay ni vestigios de mejora económica, mientras que las metas de desempeño de la economía realizadas por los funcionarios distan de cumplirse: a principios de año el Ministro Prat Gay anunció que en 2016 el crecimiento del PIB iba a ser del 1%, la inflación del 25%, y el déficit fiscal se iría reduciendo paulatinamente. Pero todas las estadísticas oficiales, incluidas las previsiones presentadas en el proyecto de ley de Presupuesto 2017, muestran la verdadera bancarrota de estas proyecciones.

En primer lugar, el Producto Bruto Interno (PBI): este año en vez de crecer 1% como habían vaticinado se espera una caída de 1,5%. Para muchas consultoras la caída será mayor todavía: cercana al 2%. En cambio, según reconoce el propio proyecto de presupuesto, la supuesta "pesada herencia" del año 2015 fue un PBI expandido un 2,4%. Es decir, la economía estaba en crecimiento y ahora está en recesión, como muestran todos los indicadores. El último cálculo oficial del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC arroja una contracción de la economía del 2,4%. La caída de la actividad, como es esperable, resintió el empleo: hoy se reconocen más de 120 mil despidos en el sector formal.

En segundo lugar, el déficit fiscal: Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el déficit en 2015 incluso utilizando la controvertida "nueva metodología" -que resta las transferencias del Banco Central- fue de 4,3% del PIB. El déficit proyectado para 2016 en el presupuesto es, pese a lo previsto, mayor: 4,8% del PIB. El problema central no es tanto que el déficit sea mayor sino los motivos que lo originan: la reducción de los impuestos a los sectores más concentrados como mineras, sojeras, grandes exportadores, capital

financiero. En síntesis: el Estado Nacional en 2016 gasta más en los que más tienen y menos necesitan.

Pero no sólo aumentó el déficit a costa de reducir la presión fiscal sobre los que más tienen y disminuir la ayuda para los que menos tienen – incluido un tarifazo de entre 300% y 400% para los hogares y 500% para las PyMEs-, sino que para solventar ese déficit, se emitió deuda por más de 46.000 millones de dólares, un récord para una economía emergente. De hecho, en lo que va de 2016, el stock de deuda en moneda extranjera creció 14%. Esta deuda no fue dirigida a inversiones en infraestructura o tecnología, sino a solventar gastos corrientes que, por la baja en la recaudación ante la caída de la actividad y la redistribución regresiva de impuestos impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, no pudieron ser afrontados con recursos corrientes.

Las consecuencias de este tipo de endeudamiento irrestricto son las de siempre: aumento del peso de los servicios de la deuda en el gasto público para los próximos años (en detrimento de otros gastos y de la inversión del Sector Público), y por sobre todo, pérdida de soberanía económica, porque para continuar refinanciando y aumentando la deuda se debe estar a tono con las exigencias de los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo. En cuanto a las perspectivas de largo plazo, la historia enseña que este camino puede conducir a la insolvencia fiscal y externa.

El ingreso de divisas vía deuda pública logró además enmascarar uno de los fracasos más contundentes del modelo económico de Macri: la "lluvia de inversiones" que nunca llegó. Según el INDEC, la inversión cayó -3,3% y -4,9% en el primer y segundo trimestre del año; y en los primeros nueve meses del 2016 ingresó menos Inversión Extranjera Directa que en 2013.

En cuanto a la inflación, en los primeros meses del año los funcionarios habían pronosticado un índice de inflación del 20/25%, pero en los primeros 8 meses del 2016 el IPC de la Ciudad de Buenos Aires marcó un incremento de precios del 31%. La inflación que acumulaba el mismo índice en los primeros 8 meses de 2015 fue de 16%. Es decir que, en lo que va del año las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo duplicaron la inflación pese a que en campaña se aseguraba que controlar la inflación era "lo más fácil de hacer".

La inflación no impidió, sin embargo, que el Poder Ejecutivo trabajara para poner un techo a las paritarias. Mientras que la inflación esperada para todo el año 2016 es de alrededor de 42%, los salarios crecerán entre 20% y 30%, las jubilaciones 30% y lo mismo la AUH. Al cabo de un año esta política económica hizo perder un mínimo de 10% en el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de AUH. No es una novedad. Los programas económicos neoliberales siempre tienen el mismo resultado: recesión, exclusión social, sobreendeudamiento y concentración del ingreso.

3. El proyecto de Presupuesto 2017: cristalización del ajuste

El proyecto de presupuesto 2017 consolida las bases del modelo económico que hemos reseñado: represión salarial, distribución

regresiva y endeudamiento. Esto, porque los aumentos previstos no logran recuperar la caída del poder adquisitivo de los salarios ocurrida durante 2017 y porque las proyecciones excesivamente optimistas de crecimiento, precios, tipo de cambio, recaudación, exportaciones e inversión implican que, cualquier desajuste entre lo previsto y la realidad lleve a requisitos de créditos públicos mayores a los ya abultados valores que busca autorizar el presupuesto.

Junto al proyecto de Ley de presupuesto de la Administración Nacional para el año 2017, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso Nacional otro proyecto de Ley que propone la paulatina reducción de las atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros para modificar los créditos presupuestarios. No obstante, las regulaciones propuestas allí resultan contradictorias con lo que se encuentra plasmado en el articulado del Proyecto de Presupuesto. Así por ejemplo, con respecto al número máximo de cargos de planta permanente y transitoria de la administración pública definidos en el artículo 6, vemos con alarma que, además de reducirse el número máximo autorizado para la planta permanente en más de 10.000 cargos, se omite su detalle por jurisdicción y se otorgan amplias facultades al Jefe de Gabinete para re-distribuir el personal entre jurisdicciones, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. Asimismo, se incorporaron dentro de las mismas facultades los cargos de áreas que antes contaban con mayor independencia por sus características, como la carrera científica.

Por otra parte, se otorga al Jefe de Gabinete de Ministros la potestad de cambiar el destino de los créditos públicos e incluir nuevos préstamos internacionales a cambio de dar de baja otros, aumentando la discrecionalidad del uso de la deuda pública. Finalmente, el Jefe de Gabinete conserva sus atribuciones para distribuir partidas excedentes.

Adicionalmente, es un proyecto de presupuesto unitario: no contempla mejoras en el reparto de los fondos ni en las prioridades de gasto hacia las provincias. En efecto, el proyecto de presupuesto presentado por el PEN omite cualquier tipo de modificación en las modalidades del reparto previsto en el esquema de coparticipación federal de impuestos vigente – como sería por ejemplo, el reparto automático de los ATN, entre otros- que podrían otorgar mayor holgura y grados de libertad a los gobiernos provinciales. Tampoco se establecen criterios para asegurar que la deuda que tome la Nación durante el ejercicio 2017, autorizada por el Congreso Nacional, puedan ser utilizados para financiar gastos de capital en las provincias de modo de contribuir a su desarrollo económico y social. En cambio, el proyecto de presupuesto bajo análisis sí prorroga los artículos 1 y 2 de la Ley 26.530 de Responsabilidad Fiscal y convoca a las provincias a que hagan lo propio.

El proyecto de presupuesto para el año 2017 presentado por el PEN contiene graves inconsistencias. Las proyecciones macroeconómicas presentadas reconocen una caída del PBI en 2016 del -1,5%, explicada por la contracción de todos los componentes (si consideramos exportaciones netas) y estiman un crecimiento de 3,5%

para 2017 explicado fundamentalmente por el mayor dinamismo en el consumo y la Inversión.

Plantean una devaluación del tipo de cambio de 19,5% para 2017, que estaría en línea con el aumento de los precios (19,4%, según el deflactor del PBI). Con lo cual, el Tipo de Cambio Real se mantendría en un nivel similar al de 2016 si se toma el deflactor o algo por debajo si se toma en cuenta la meta de inflación propuesta por el BCRA (17%)

La proyección de crecimiento de inversión que sustenta el aumento esperado del PBI en 2017 resulta optimista en exceso si se la compara con la elasticidad inversión/PBI promedio para los años 2004-2015: 2,8. La elasticidad de la inversión / PBI contenida en la proyección es en cambio de 4,11, lo que indica que, a pesar de lo que muestra la realidad, siguen esperando la lluvia de inversiones.

La elevada expectativa sobre las inversiones llama especialmente la atención cuando se tiene en cuenta que, en lo que va de 2016, el presupuesto para obras públicas se encuentra sumamente subejecutado: en los primeros diez meses del año se evidencia una caída nominal de -1.4% anual en los gastos de capital, lo cual implica un nivel de inversión muy inferior al del año pasado en términos reales. En esta misma línea, el proyecto de presupuesto 2017 presentado por el Poder Ejecutivo omite un importante número de obras que se suponía comenzarían a realizarse en todo el territorio nacional durante el próximo año, algunas de las cuales incluso fueron aprobadas e iniciadas en años anteriores. Aun cuando se proyecta un incremento de la inversión pública para el próximo período fiscal, preocupa que se desfinancien obras relevantes para el desarrollo de las provincias más vulnerables y se otorgue prioridad a otras en zonas de menor vulnerabilidad.

El problema con el exceso de optimismo en la proyección de estas variables es que de no cumplirse lleva a la necesidad de recurrir al endeudamiento público.

El presupuesto de Gastos de la Administración Nacional refleja las prioridades gubernamentales: los pagos de servicios de la deuda y de la Seguridad Social - por los pagos de la "reparación histórica" y la extensión de Asignaciones Familiares a trabajadores autónomos- crecen más que el aumento promedio del Gasto (22%) mientras que se reducen drásticamente los subsidios a las tarifas de los servicios públicos - los créditos asignados al Ministerio de Energía y Minería se reducen 17,9% respecto de 2016.

Las jurisdicciones con muy escaso crecimiento son: ministerio de producción (0,8%), ministerio de agroindustria (2,8%), ministerio de cultura (4,4%) y ministerio de salud (4,9%).

El crecimiento estimado de los recursos de la Administración Nacional es de 25,2% respecto de 2016 y, más allá de la insistencia del gobierno sobre la "elevada" presión tributaria heredada de la gestión

anterior, la presión tributaria se incrementa: pasaría de 25,33% a 25,97% del PIB.

El crecimiento de la recaudación total nominal se explica por el aumento del IVA, Ganancias y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. En sentido contrario se reducen en términos nominales el Impuesto a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. En síntesis, crece fuertemente la regresividad del sistema tributario argentino.

Las proyecciones de incremento de la recaudación de IVA y de derechos de exportación resultan excesivamente optimistas. Una vez más, el problema del exceso de optimismo en esta materia es que cuando la recaudación no llega a cubrir las necesidades de financiamiento de los créditos presupuestarios previstos, se requiere financiamiento a través de endeudamiento.

Las proyecciones de recursos y gastos presentadas arrojan un resultado primario (neto de ANSES y BCRA) para 2017 de -\$413 MM (4,24% del PIB) que se ubica 0,9 p.p. por sobre la meta de 3,3% que había anunciado Prat Gay en enero de 2016; y un déficit financiero proyectado de -4,93%.

El escenario fiscal planteado en el Presupuesto 2017 implica un incremento neto de la deuda pública de unos USD 25.000 millones de dólares. Esto es, después de renovar todos los vencimientos de deuda, el Tesoro tendrá que colocar un monto equivalente a 4,5% del PIB para cerrar el programa financiero.

Cerca del 80% de esta nueva deuda, no se destina a financiar nuevas obras de infraestructura, sino a cubrir gastos corrientes de la administración pública. Se desprende del proyecto que el Gobierno estima utilizar principalmente instrumentos denominados en moneda extranjera, deteriorando de forma sensible la hoja de balance del sector público.

Es decir, en lo que hace a la gestión financiera el Gobierno piensa reproducir lo actuado en 2016: financiar el desequilibrio fiscal corriente con deuda externa que también solventa la fuga de capitales.

4. Algunos puntos concretos a nivel programático.

A nivel programático: se eliminaron programas masivos como Fútbol para Todos, se reduce fuertemente el presupuesto asignado al programa Progresar (en términos nominales pasa de 8.000 millones a 5.500 millones de 2016 a 2017) y diversos programas de acceso a la cultura.

También se reduce fuertemente el presupuesto asignado a las políticas de defensa de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en el Ministerio de Justicia. En particular, se observa con gran preocupación la fuerte reducción nominal del presupuesto destinado a dos programas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad (-49%) y Formación Universitaria en Derechos

Humanos (-76%). En el mismo sentido alarma la reducción en más de la mitad de la partida presupuestaria destinada a la custodia del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), toda vez que se trata de un área de extrema sensibilidad para las causas donde se investigan y juzgan delitos de lesa humanidad, y para la preservación de la memoria colectiva de nuestro pueblo.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2017 establece recortes en programas y líneas de trabajo de alcance nacional que el Ministerio de Educación de la Nación viene llevando adelante, en el marco de las obligaciones definidas en la Ley de Educación Nacional 26.206 y de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, cuya meta es alcanzar el 6% del PBI y de la Ley de Educación Superior 24.521. Así por ejemplo, resulta preocupante la pérdida de partidas presupuestarias como el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines); el recorte de 50% en términos nominales de la partida destinada a la Educación de Adultos; entre tantas otras. Resulta especialmente grave corroborar que el presupuesto destinado a la formación docente para 2017, un área específica para la mejora de la calidad educativa a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), disminuye un 24% en términos reales mientras que en contraposición, en materia de evaluación educativa se observa un incremento significativo de un 126% para la función Evaluación. Evaluación sin formación resulta una fórmula controvertida para la educación argentina, y en particular para el sector trabajador docente.

Respecto de las transferencias previstas para el financiamiento de las Universidades Nacionales, perjudican en su distribución a las Universidades de reciente creación tanto en gastos corrientes como en infraestructura universitaria. Más allá de casos específicos donde se ha dejado a universidades con pocos fondos asignados para la cobertura de gastos corrientes, no se ha ejecutado en su totalidad el fondo para cobertura de tarifas de \$500 millones anunciado por el Presidente, se dejaron "debajo de la línea" otros \$500 millones para Ciencia y Tecnología cuya asignación queda a discreción de la autoridad ministerial. A su vez, en 2017 en el presupuesto se prevé una reducción en la cantidad de becas de Universitarios de bajos recursos: de los 23.019 becarios que recibieron este beneficio en 2015, bajó a 19.334 en 2016, y según el presupuesto se estima que en 2017 se reduzca a 14.350.

En el mismo sentido, se recorta el presupuesto de ciencia y tecnología, concebido como uno de los pilares centrales para el desarrollo en la década pasada: los fondos asignados a este Ministerio caen en términos reales, y los créditos que se le asignan alcanzan la participación más baja sobre el Producto Bruto Interno desde su creación. En efecto, el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (que incluye no solamente al Conicet sino también a la ANPCyT y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales) pasa del 0,71% del total del presupuesto nacional en 2016 al 0,59% del total en 2017. De este modo, un organismo emblemático como el Conicet, podría ver seriamente afectada su capacidad de incorporar nuevos investigadores y becarios e incluso de cubrir los gastos asociados a las tareas realizadas por sus

investigadores y becarios actuales. En el mismo sentido, la función Ciencia y Técnica del Presupuesto, que determina el financiamiento de todos los órganos descentralizados del sector, reduce su participación en un 13%, pasando de representar el 1,5% del presupuesto del año 2016 al 1,3% en 2017. Evidentemente, la apuesta al desarrollo científico y tecnológico no es un pilar de gestión para el Poder Ejecutivo.

Tampoco parece ser relevante para la gestión actual de la política económica el desarrollo de la producción nacional, tal como se evidencia en el proyecto de presupuesto 2017. Las partidas asignadas al Ministerio de la Producción caen en términos reales un 15,6%, y dentro de dicho Ministerio el presupuesto asignado a la Secretaría de Industria pasó de \$539 millones en 2016 a \$518 millones en 2017, lo que representa una caída del 4.1% nominal y un 19,7% real.

Del mismo modo, el presupuesto destinado al Ministerio de Agroindustria se reduce -14% en términos reales, desfinanciando y poniendo en riesgo la sustentabilidad de programas de gran relevancia social –además de productiva- como el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera creado por Ley N° 26.060 la cual el proyecto de presupuesto 2017 le asigna el mismo crédito que en 2016; entre otros.

Preocupa también el desfinanciamiento de organismos claves para la implementación de mejoras tecnológicas como son el INTI, el INTA: El presupuesto previsto para el INTA en 2017 contiene una caída real de -2.13%. Esta caída en la asignación presupuestaria no sólo no contempla diversas inversiones necesarias para la mejor gestión del organismo, sino que además pone en riesgo de forma directa muchos puestos de trabajo a partir del 1 de enero de 2017, como así también a 340 becarios en formación que no podrán ser incorporados.

En términos de generación de energía, alerta, entre otras, que no se cumpla con el presupuesto necesario para llevar adelante las inversiones industriales necesarias para la efectiva explotación de carbón –incluyendo garantizar la planta activa de personal y el cumplimiento de las obligaciones empresariales - por parte de la Empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Gallegos de manera de cumplir con las extracciones necesarias para proveer la Usina Termoeléctrica "14 Mineros". De acuerdo a estimaciones de los propios trabajadores de la empresa en base a las inversiones ya planificadas el presupuesto para esta empresa debería superar los \$6.600 millones de pesos, frente a los \$4.369 millones asignados. Así mismo, el presupuesto establece que el Estado Nacional tomará a su cargo las obligaciones generadas en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) por aplicación de la Resolución N° 406 de fecha 8 de setiembre de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, correspondientes a los excedentes generados por el COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DE SALTO GRANDE. Dado que –pese a los ajustes tarifarios - no se han actualizado los montos de estos excedentes, sería adecuado quitar al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande de este artículo.

Otra de las jurisdicciones con asignación presupuestaria que resulta preocupante es el Ministerio de Salud, que crece sólo un 4,9% nominal, y registra una caída en términos reales del -12,1%. Al interior de dicho Ministerio se observa una disminución del 48% en el Programa de Atención a la Madre y el Niño respecto al año 2016, una caída del 88% en la asignación al programa Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud, que tienen como objetivos financiar intervenciones tendientes a fortalecer el sistema público de salud y, en particular, a afianzar la capacidad de respuesta de los efectores que integran la red de atención primaria de salud, entre otros reducciones presupuestarias.

El caso del Ministerio de Cultura también es crítico, con una caída real del presupuesto de -12,6% y el desfinanciamiento casi total de múltiples programas destinados al acceso masivo a bienes y servicios culturales.

El avance en la lucha contra el narcotráfico es una de las banderas esgrimidas por el Gobierno Nacional en el mensaje que acompaña el proyecto de presupuesto 2017. Sin embargo, observamos con preocupación el retiro del Estado en la prevención y contención de las adicciones, la contracara de este flagelo. El presupuesto asignado al SEDRONAR crece un 33%. La composición del mismo genera preocupación sobre la prestación futura de los servicios de esta Secretaría. Las actividades centrales y el programa que se encargan de la prevención, la atención telefónica anónima, así como de la capacitación y la asistencia en pos de dos objetivos claves: la reducción de la demanda de drogas y la reducción de la oferta de drogas, se encuentran completamente desfinanciados. El aumento de estas partidas no supera el 8% en términos nominales. En cambio, el grueso del incremento del presupuesto de la Secretaría se asigna al programa Diseño, monitoreo y abordaje territorial que es una redefinición del programa antes llamado “Recuperar inclusión”. Dicho programa hasta 2016 estaba dirigido a la construcción de Casas Educativas Terapéuticas y Centros Preventivos Locales estatales en colaboración con las Universidades Nacionales. El proyecto de presupuesto 2017, en cambio, redirige las partidas a transferencias corrientes al sector privado; es decir: las ONG quedan a cargo del rol que antes estaba previsto para el Estado.

Otro programa que sufre recortes en el presupuesto 2017 es el de “Formulación e implementación de políticas públicas de la Mujer” para el cual está previsto un incremento de solamente 12% lo que implica una caída en términos reales de 8%. Este programa, forma parte del Concejo de Coordinación de Políticas Sociales, que durante los primeros 10 meses de 2016 tiene un elevado nivel de subejecución (43%) poniendo en evidencia que las acciones sociales y las políticas de género no son prioridades para el Poder Ejecutivo Nacional.

Como contrapartida a todos estos recortes, crecen fuertemente los servicios de deuda, que pasan de \$186.900 millones en 2016 a \$247.328 millones en 2017 (+32.3%).

También es necesario reflejar en el presente Presupuesto las sugerencias elevadas al Congreso de la Nación por la Comisión

Federal de Impuestos, es decir, las modificaciones de los artículos 27 y 58 de la Ley 27.260 y la eliminación del artículo 24 del Proyecto elevado por el ejecutivo. Asimismo sería oportuno que la Ley de Presupuesto deje sin efecto transitoriamente el gravamen previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones hasta el 31 de diciembre de 2017.

5. Conclusión.

En síntesis, el proyecto de presupuesto plantea, para el año 2017 más devaluación (20%), una inflación del 17% y una "pauta salarial" del 18%. Es decir que el proyecto de presupuesto presentado no prevé ningún tipo de recuperación de los ingresos perdidos por los asalariados y sectores vulnerables durante el 2016. Si a la pérdida de ingresos reales de 2016 se le suma la quita de subsidios prevista en 2017 y la pérdida de puestos de trabajo en el sector público que el proyecto de presupuesto 2017 busca legitimar, se torna especialmente difícil identificar cómo se prevé avanzar hacia la tan pregonada meta de "pobreza cero". De momento, según las estadísticas en las que el actual poder ejecutivo siempre dijo confiar, en los primeros cinco meses de gobierno se incrementó la cantidad de pobres en 1,4 millones.

María E. Labado.-

* VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO